

POLÍTICOS GOLPISTAS. PACHECO Y EL PACHEQUISMO EN LA INSTALACIÓN DE LA DICTADURA EN URUGUAY (1973-1974)¹

COUP POLITICIANS. PACHECO AND PACHEQUISM IN THE
INSTALLATION OF THE DICTATORSHIP IN URUGUAY (1973-1974)

Marcos Rey²

FHCE, Uruguay

DOI: [https:// doi.org/ 10.59842/ 16.2.8](https://doi.org/10.59842/16.2.8)

Recibido: 15/08/2023

Aceptado: 03/12/2023

Resumen

Este artículo examina los posicionamientos del expresidente Jorge Pacheco Areco y de algunos dirigentes de la Unión Nacional Reelectionista (UNR), el sector mayoritario del Partido Colorado, en los meses siguientes a la disolución del Parlamento concretada el 27 de junio de 1973. Los resultados de este estudio ponen en cuestión la dicotomía «políticos-militares» instalada en los años ochenta y utilizada en forma retrospectiva para todo el período dictatorial al prestar atención a parte de la derecha política colorada que apoyó el desenlace golpista y contribuyó con la instalación de la dictadura en Uruguay. El artículo sistematiza datos dispersos en la bibliografía, aporta nuevas evidencias empíricas y problematiza las memorias y enfoques académicos que reparan en los dirigentes y partidos políticos uruguayos solamente como opositores a la dictadura. El estudio se basa en fuentes de prensa, documentación oficial, la correspondencia privada de algunos pachequistas y los reportes de la diplomacia francesa instalada en Montevideo.

Palabras clave: Derechas, pachequismo, anticomunismo, autoritarismo

Abstract

This article examines the positions of former President Jorge Pacheco Areco and some leaders of the National Reelectionist Union (UNR), the majority sector of the Colorado Party, in the months following the dissolution of Parliament on June 27, 1973. The results of this study they question the «political-

¹ Este artículo sintetiza un capítulo de mi tesis de Maestría en Historia Política titulada «Pacheco y el pachequismo. Anticomunismo y democracia restrictiva en el Uruguay del autoritarismo y la dictadura (1972-1985)» (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República).

² Docente e investigador en el Departamento de Historia del Uruguay (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República) y profesor de Historia en la Enseñanza Secundaria. marcosrey.h@gmail.com.

military» dichotomy installed in the eighties and used retrospectively for the entire dictatorial period by paying attention to part of the political right that supported the coup outcome and contributed to the installation of the dictatorship in Uruguay. The article systematizes data scattered in the bibliography, provides new empirical evidence and problematizes memories and academic approaches that pay attention to leaders and political parties only as opponents of the dictatorship. The study is based on press sources, official documentation, private correspondence of some pachequistas and reports from the French diplomacy installed in Montevideo.

Keywords: Right, pachequismo, anti-communism, authoritarianism

Introducción

El expresidente Jorge Pacheco Areco y varios dirigentes pachequistas apoyaron el golpe de Estado y participaron en la conducción civil de la dictadura uruguaya (1973-1985). No obstante, han recibido escasa atención en los relatos históricos que han tendido a ubicar a los partidos políticos uruguayos solamente como opositores a la dictadura. La hipótesis partidocrática que asigna a los partidos un lugar central como sujetos gobernantes en la historia uruguaya formulada por Gerardo Caetano, José Rilla y Romeo Pérez (1987) sirve, según sus autores, para explicar a los partidos en democracia y no en los períodos dictatoriales.³ Esta perspectiva, combinada en la posdictadura con la literatura politológica sobre la «transición a la democracia», comúnmente llamada «transitología», contribuyó a ubicar a los partidos políticos uruguayos como bloques opositores a la dictadura, proyectando en retrospectiva hacia todo el período dictatorial el escenario predominante en 1984. Al tomar la parte por el todo (a los partidos por sus sectores opositores), la derecha política del Partido Colorado quedó relegada como un actor residual equiparable o reducible a la actitud individual y «desleal» de Pacheco con la democracia liberal (Rial, 1984; González, 1985 y 1993; Gillespie, 1995; Costa Bonino, 1995).⁴ Gillespie (1995), por ejemplo, al estudiar a los partidos en la «resistencia al autoritarismo» en los setenta y en la promoción de «alternativas políticas sustantivas del

³ Los autores señalaron años después que la hipótesis partidocrática ha sido «mal entendida» cuando se la presenta como una teoría complaciente con los partidos o «convalidante» de los partidos Blanco y Colorado y admitieron que servía para explicar a los partidos en democracia y no en dictadura. Véase la entrevista a los autores realizada por Bruno, Duffau, Ferreira (2012, p. 282). Una mirada crítica en Demasi (2012).

⁴ Estos trabajos adoptaron el marco interpretativo de Linz (1987) para explicar la crisis de los regímenes democráticos según la lealtad o deslealtad de los actores políticos hacia la democracia liberal, así como el marco de análisis de los estudios comparativos de las transiciones a la democracia en América Latina de O'Donnell, Schmitter y Whitehead (1988) centrados en los procesos de negociación entre las elites políticas (opositoras) y los militares.

régimen militar» en los ochenta ubicó a Pacheco como un líder desleal a la democracia frente al «golpe de Estado militar» y sostuvo que el «régimen militar» contó con la colaboración de Bordaberry y de unos «pocos conservadores, en general rurales» y «reducidos a sectores pachequistas y herreristas» (pp. 6, 93,99 y 126).

Las investigaciones que avanzaron en el estudio de los partidos en la dictadura también concentraron su interés en los opositores. Pese a que el pachequismo fue la alianza electoral más votada del Partido Colorado en las elecciones de 1971, Silvia Dutrénit (1994a) lo ubicó como un actor homogéneo y marginal al identificar tres posturas partidarias ante el régimen (respaldo, repliegue y resistencia). Según la politóloga, el respaldo al régimen estuvo «representado nítidamente, y sin matices, por sectores minoritarios de los partidos tradicionales» a los que refirió como pachequistas y herrero-ruralistas (p. 101). En otro trabajo, apoyada en las entrevistas realizadas a dirigentes partidarios, señaló que el «polo opositor» fue muy dinámico con respecto al «polo oficialista» que «conservó su composición partidaria, su mismo personal político y su exiguo tamaño en términos de representatividad hasta el final del régimen» (p. 27). Eduardo Alonso (2012), al estudiar la actividad clandestina de blancos y colorados a partir de entrevistas a opositores a la dictadura, registró las acusaciones cruzadas entre blancos y colorados sobre la participación de políticos y civiles de ambas colectividades en el gobierno dictatorial. En esas memorias, así como en las conclusiones del politólogo, ambos partidos son equiparados solamente a sus sectores opositores. No aparecen vinculados a la «demanda autoritaria» que los entrevistados atribuyen a la sociedad antes de 1973, pero sí a la «demanda democrática» que adjudican a los partidos desde 1980. La ubicación del pachequismo como un sector minoritario y marginal en todo el período dictatorial aparece también en los diversos trabajos panorámicos o de síntesis que dedican un espacio significativamente mayor a los políticos opositores que a los oficialistas.

El estudio del pachequismo puede formularse entonces como un *problema histórico*: poco se conoce sobre la trayectoria en la dictadura de un elenco político que fue apoyado por una parte relativamente significativa de la población uruguaya en las consultas democráticas de 1971 a 1989.⁵ Por una parte, se asume que en todo el período

⁵ En 1971 la reelección de Pacheco fue votada por 491.680 mil uruguayos (29 % del electorado). En 1982, en las elecciones internas no obligatorias las listas pachequistas recibieron 153 mil votos (12,2 % del total de votantes a los partidos habilitados). En 1984 obtuvo 183.588 sufragios (9,5 % del electorado) y en 1989 incrementó su votación a 289.222 (14,68 % del electorado). Venturini (1989) y Marius (2004).

dictatorial los políticos opositores fueron mayoritarios y los oficialistas minoritarios, usando de forma retrospectiva los resultados de las elecciones internas de los partidos de 1982. No obstante, los pachequistas fueron votados por el 55 % de los colorados en las elecciones de 1971 y constituyeron la bancada parlamentaria más numerosa, compacta e influyente de la deriva golpista del gobierno constitucional de Juan María Bordaberry (1972-1973). Por otra parte, el interés analítico en el pachequismo ha estado centrado en su faceta represiva en la conducción estatal antes del golpe de Estado, no en sus propuestas, acciones y posiciones en la dictadura. Si a este lugar episódico, reactivo y previo a la dictadura que ocupa el pachequismo en los relatos históricos se agrega que se lo presenta como un actor homogéneo, inmutable y marginal del Partido Colorado, puede plantearse también como un *problema historiográfico*.⁶

Este artículo propone examinar las posiciones de Pacheco y de algunos dirigentes pachequistas al inicio de la dictadura entre 1973 y 1974. Se basa en fuentes de prensa, documentación oficial (leyes, decretos, resoluciones, informes de la inteligencia policial y militar), la correspondencia privada del pachequista Federico García Capurro y los informes del embajador Jean François (1971-1975), el más prolífico de los diplomáticos franceses del período dictatorial. Sus reportes resultan de gran utilidad para contrastar sus observaciones con otras fuentes, aunque es preciso advertir que denotan cierta antipatía hacia Pacheco, posiblemente por los informantes a los que recurría, lo que refuerza los recaudos sobre los alcances y la confiabilidad de algunas de sus apreciaciones.

El pachequismo frente a la disolución del Parlamento en 1973

El presidente Juan María Bordaberry disolvió por decreto el Parlamento el 27 de junio de 1973. Este autogolpe, acordado con las Fuerzas Armadas, fue apoyado por la derecha liberal conservadora del Partido Colorado. El 3 de julio de 1973 el expresidente Jorge Pacheco Areco envió desde España un telegrama de apoyo a Bordaberry, abogó por la «comprensión y cooperación de los orientales «con el «destino de la Patria» y se fue de vacaciones a las Islas Canarias.⁷ Al día siguiente, la Unión Nacional Reelectionista

⁶El pachequismo fue decisivo para el triunfo electoral del Partido Colorado antes y después de la dictadura: representó el 55,07 % en 1971, el 23,6 % en 1984 y el 48,45 % en 1989, aunque en esta última elección perdió el gobierno ante el triunfo del Partido Nacional.

⁷«Telegrama de Pacheco Areco», *La Mañana*, 3 de julio de 1973, p. 5; «Pacheco, incógnito en Las Canarias», *La Mañana*, 11 de julio de 1973, p. 4

(UNR), el sector político del Partido Colorado más votado en las elecciones de 1971 y que dirigía desde Madrid, donde residía como embajador uruguayo desde mediados de 1972, emitió una declaración de apoyo a la «difícil e histórica actitud» del presidente devenido en dictador y comprometió su esfuerzo para concretar una «nueva institucionalidad» y la «organización constitucional» sobre bases «genuinamente democráticas».⁸

«Demócratas», como se autoidentificaban las derechas liberal conservadoras en su combate al «totalitarismo marxista» desde el inicio de la Guerra Fría, fue una seña de identidad asumida por el pachequismo. La compartieron con parte del conglomerado de las derechas cuya percepción de asedio, acentuada con la radicalización de 1968, alimentó la escalada autoritaria y el golpe de Estado de 1973. En esos años las derechas instalaron un discurso dicotómico entre partidos «demócratas» y «totalitarios» (Demasi, 2009, p. 24), inscripto en un viraje global sobre la conceptualización de la democracia en el mundo occidental plantada en clave bélica y donde la toma de decisiones debía subordinarse al Poder Ejecutivo y a los elencos tecnócratas (Ferreira, 2012).

Para los pachequistas el golpe de Estado fue una medida inevitable, transitoria y necesaria por su carácter preventivo para enfrentar la amenaza subversiva, así como por su potencial productivo para restaurar y refundar el país sobre «bases más firmes», inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional y en una concepción restrictiva, belicista y elitista de la democracia. Coincidieron así en que el «proceso cívico-militar», como lo llamaban sus promotores, debía servir para reformar la constitución y blindar la «seguridad nacional» con la tutela de las Fuerzas Armadas, depurar a los partidos con un rígido estatuto y fortalecer las atribuciones del Poder Ejecutivo. En julio de 1973, Federico García Capurro, integrante de la directiva de la UNR, se mostró ilusionado en una entrevista periodística con la «imprescindible» participación de las Fuerzas Armadas en el «quehacer nacional» y con la labor patriótica a la que estaba llamada la

⁸«Mensaje del reeleccionismo», *La Mañana*, 5 de julio de 1973, p. 4. El comité ejecutivo de la UNR se integraba por Ulysses Pereira Reverbel, Danilo Sena, Federico García Capurro, Milton Fontaina, Agustín Caputti, RaumarJude, Justino Carrere Sapriza, Jaime Montaner, Ángel Rath, Juan A. Singer, Jorge Sapelli, Oscar Rachetti, Eugenio Capeche, Nassim Ache, Walter Ravenna, Carlos Pirán, Walter Santos, Carlos M. Fleitas, Juan J. Amaro, Luis Carrese, Jaime López Barrea, Raimundo Abella y Carlos M. Pena [Propaganda de la UNR, *El Diario*, 18 de octubre de 1972, p. 2]. El mensaje de apoyo al golpe de Estado llevaba la firma de los senadores Agustín Caputti y RaumarJude, presidente y secretario general respectivamente de la UNR. Sin embargo, en la misma noticia se informaba que Jude se desmarcaba de ese apoyo y efectivamente sentó entonces las bases del efímero «pachequismo disidente» del primer lustro de la década del ochenta.

«fracción viril de los orientales».⁹ Aseguró que veía con frecuencia a Pacheco y que era público su apoyo a las Fuerzas Armadas para superar la crisis política, cuyo efectivo combate remontó a 1968. El exdiputado reeleccionista Wilson Craviotto defendió la disolución del Parlamento porque «no se podía seguir soportando que los enemigos del país le hicieran decir a la Constitución lo que esta no dice» en «complicidad con los demagogos». Para Craviotto, líder del Movimiento Nuevo Uruguay, «la democracia se salvará pues con hombres limpios, con verdaderos líderes, capaces de conducir muchedumbres», esperanzado en el inminente retorno de Pacheco a Uruguay.¹⁰

La coalición golpista liderada por las Fuerzas Armadas e integrada por diversos actores civiles de la derecha política, mediática, empresarial, social y religiosa comenzó por dismantlar las instituciones representativas de la democracia uruguaya a las que calificaba de «aparatos ideológicos de la sedición»: los sindicatos, la universidad y la enseñanza, la prensa y los partidos políticos (Lerin y Torres, 1987). Invocando la Ley de Seguridad del Estado de 1972 esto se concretó de forma escalonada en los meses siguientes a la disolución del Parlamento: la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) fue ilegalizada en junio, la Universidad de la República (Udelar) intervenida en octubre y la amplia mayoría de los partidos de izquierda ilegalizados en noviembre de 1973. El dismantamiento de la institucionalidad democrática fue al mismo tiempo innovador y continuador de políticas autoritarias anteriores. Durante el gobierno de Pacheco (1967-1972) se ilegalizó por decreto a grupos y partidos de izquierda, intervenido la autonomía de la enseñanza secundaria y técnica y restringido la actividad sindical y las libertades civiles al aplicar de forma permanente las medidas prontas de seguridad.

La desestructuración del sistema de medios desde 1973, corolario de las censuras, allanamientos y clausuras sistemáticas aplicadas desde 1968, restringió a su mínima expresión la opinión pública. Estas medidas abrieron el camino hacia el monopolio de la información estatal y oficial, precedidas de cientos de cierres temporales de diarios y revistas antes del golpe de Estado de 1973 (Gabay, 1988). La dictadura toleró el debate de ideas en una reducida esfera pública de medios de comunicación que apoyaron o no se opusieron a la coalición golpista, aunque discreparan sobre el rumbo, integración o

⁹«Dr. García Capurro: “después de la conmoción, vendrán tiempos mejores”», *La Mañana*, 22 de julio de 1973, p. 4.

¹⁰«Con la Patria» y «Los Hombres Limpios Salvarán al País», *Democracia*, julio de 1973, tapa y p. 3.

duración del régimen dictatorial (Marchesi, 2001). La prensa opositora de izquierdas desapareció con el cierre del diario *El Popular* en 1973 y los semanarios *Marcha y Ahora* en 1974, mientras que la comunicación oficial contó con el apoyo entusiasta de *El País*, *La Mañana* y *El Diario*, así como de las empresas y agencias de publicidad que contribuyeron a producir y difundir las campañas de propaganda estatal (Martínez, 2022).

En cuanto a la prensa colorada de circulación nacional se clausuró el diario *Acción*, propiedad de Jorge Batlle, en tanto *El Día* fue el único reducto mediático que nucleó a dirigentes colorados opositores, aunque moderó su perfil disidente con la directiva cercana a Pacheco que asumió en 1977 (Buquet, Chasquetti y Monestier, 2021, p. 109). *La Mañana* y *El Diario*, de la empresa Seusa S.A., respaldaron el golpe de Estado y actuaron como voceros y espacios de sociabilidad política de autoridades civiles, militares y referentes empresariales. En el «cóctel» que *La Mañana* ofreció en su stand de la Rural del Prado el 9 de agosto de 1973, el primero de varios eventos anunciado para celebrar el impulso que esperaban para el sector agroexportador, posaron en primera plana los pachequistas José Etcheverry Stirling (ministro de Industria) y Héctor Buela (subsecretario de esa cartera), Walter Romay (presidente de la Asociación Rural), Horacio Abadie Santos (presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica), junto a representantes de algunos frigoríficos y a Carlos Manini Ríos (h.), redactor responsable del matutino. Participó también el coronel Amauri Prantl, asesor de la empresa Seusa S.A., poco después ascendido a general y director del Servicio de Información y Defensa (SID).¹¹

La marginación de los «políticos profesionales» de la UNR

La dictadura no ilegalizó a los partidos Colorado, Nacional, Demócrata Cristiano o la Unión Cívica, pero no permitió su actividad pública hasta 1980. En cuanto a los colorados, Unidad y Reforma liderada por Jorge Batlle anunció que se organizaría para «hacer caer la dictadura», aunque se replegó y desmovilizó sin adoptar una oposición activa hasta 1980 (Dutrénit, 1994). La UNR, por su parte, anunció que a instancias de Pacheco el sector sería reestructurado, tendría una nueva denominación y su dirigencia iniciaría una gira nacional. El exsenador Jaime Montaner, luego de «extensas jornadas

¹¹ «Reunión en el stand de «La Mañana», *La Mañana*, 9 de agosto de 1973, p. 13. José Etcheverry Stirling y Héctor Buela participaban en varias comisiones de trabajo de la UNR desde 1972.

de trabajo» en Madrid con Pacheco en agosto de 1973, daría a conocer las nuevas directivas del líder al retornar a Uruguay. Se adelantaba que Pacheco reiteraba su apoyo al gobierno e instaba a su sector a identificarse con las «autoridades electas». La dirigencia reeleccionista en Montevideo, en tanto, realizaba gestiones con el ministro del Interior, el coronel Néstor Bolentini, para iniciar la reestructura partidaria.

Abocados a esta tarea, ninguno de los dirigentes pachequistas apoyó una carta pública suscrita mayoritariamente por referentes de la derecha liberal conservadora opuesta al golpe de Estado y difundida el 9 de agosto de 1973. Dirigentes y figuras coloradas, blancas y cívicas, autodefinidos como «auténticamente demócratas» y no alineados con «formulas marxistas-leninistas o fascistas» reivindicaron la vigencia de sus partidos y «en el más corto plazo posible» el retorno a la «normalidad institucional». La equidistancia proclamada aludía tanto a los grupos golpistas como a la mayoría opositora del Partido Nacional y al Frente Amplio que en conjunto habían divulgado un mes antes un comunicado de rechazo a la dictadura y apoyo a la huelga general de la CNT.¹²

En setiembre de 1973 se anunció que Pacheco regresaría a Montevideo o sería trasladado como embajador a Paraguay.¹³ Los reeleccionistas coincidían en su lealtad al expresidente, pero discrepaban con la posición a asumir ante Bordaberry. Los exsenadores Agustín Caputti, Jaime Montaner, Juan Adolfo Singer, Ángel Rath y Justino Carrere Sapriza eran favorables a continuar apoyándolo, no así los liderados por Raumar Jude. Hasta octubre de 1973, *El Diario* y *La Mañana* difundieron los intentos de reestructura de la UNR para elegir una nueva mesa ejecutiva, «desplazar» a quienes se pronunciaron en contra de la «línea seguida» por el Poder Ejecutivo y reemplazar al secretario general Raumar Jude, opositor al desenlace golpista.¹⁴ A pedido de Ángel Rath la elección de la mesa ejecutiva se aplazó, aunque finalmente no fue autorizada por el gobierno.¹⁵

El intento de reconvertir a la UNR en un renovado sostén político de Bordaberry no prosperó. La opción por civiles presentados como «apolíticos» o sin actividad partidaria en los últimos años marginó a los dirigentes reeleccionistas, alcanzados por el

¹²«Ciudadanos reafirman vigencia democrática», *El Diario*, 9 de agosto de 1973, p. 4.

¹³«Pacheco Areco vendrá dentro de tres meses», *El Diario*, 8 de setiembre de 1973, p. 4.

¹⁴«Renuevan autoridades en el reeleccionismo», *La Mañana*, 7 de agosto de 1973, p. 4.

¹⁵«UNR aplazó elección de su mesa ejecutiva», *El Diario*, 13 de setiembre de 1973, p. 4. «Los desvelos reeleccionistas», *La Mañana*, 3 de octubre de 1973, p. 4.

descalificativo de «políticos profesionales» que ellos mismos emplearon contra los opositores y que ahora se volvía en su contra. El diputado reeleccionista Wilson Craviotto, vicepresidente de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), se mostró decepcionado con la suspensión de la actividad de los políticos «honestos, capaces y patriotas». ¹⁶ En su afán de demostrar patriotismo, Craviotto reclamó el reemplazo de los intendentes del Partido Nacional que respondían a Wilson Ferreira por personas leales a Bordaberry y divulgó en el semanario *Democracia*, periódico canario de su propiedad, una amplia lista de instituciones sociales uruguayas vinculadas a la «infiltración marxista» y pasibles de represión por la promoción de la «subversión en la cultura y el deporte». ¹⁷

En definitiva, la UNR no logró reposicionarse como sostén político de Bordaberry. La disolución del Parlamento desactivó las investigaciones parlamentarias y judiciales en curso sobre la presunta corrupción en las empresas públicas que involucraban a empresarios y dirigentes reeleccionista, según denunciaron dos exlegisladores opositores en agosto de 1973. ¹⁸ El grupo de los pachequistas «disidentes», como los llamó la prensa por su rechazo al desenlace golpista, se identificó con el liderazgo opositor del exsenador Raumar Jude. El grupo de los pachequistas «ortodoxos», favorables al golpe de Estado, tuvo trayectorias diversas. Los cinco senadores con mayor arraigo territorial y perfil político (Singer, Carrere, Caputti, Rath y Montaner) iniciaron el trámite jubilatorio por su labor legislativa o se replegaron a sus negocios privados hasta 1980. ¹⁹ En cambio, otros integrantes de la directiva de la UNR (Ravenna, Rachetti, García Capurro y Abella), al igual que otros referentes pachequistas, continuaron o se sumaron al gobierno de facto.

¹⁶ «Políticos, Sí», *Democracia*, 12 de setiembre de 1973, p. 3.

¹⁷ «Infiltración comunista en la cultura y el deporte», *Democracia*, 29 de agosto de 1973, p. 3.

¹⁸ El Parlamento había constituido comisiones investigadoras o se proponía instalarlas por las denuncias de corrupción que involucraban a jefes reeleccionistas de UTE, OSE, ANCAP, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social. Véase las entrevistas al exsenador blanco Carlos Julio Pereira («La única fuente de poder», *Marcha*, 10 de agosto de 1973, pp. 8 y 9) y al exdiputado frenteamplista Julio Grenno («Un día en el banco de previsión», 24 de agosto de 1973, *Marcha*, p. 10). Las excepciones fueron la del intendente de Maldonado, Gilberto Acosta Arteta, electo por la UNR y destituido por acusaciones de corrupción y la del excanciller Juan Peirano Facio, cercano al pachequismo, cuyo proceso judicial no se interrumpió, como sí sucedió con el del expresidente de UTE, Ulysses Pereira Reverbel, como protestaron algunos militares (Lessa, 2017, p. 104) («Proceso al intendente», *Marcha*, 16 de noviembre de 1973, p. 8).

¹⁹ Montaner era empresario rural en Tacuarembó; Caputti propietario de negocios comerciales y de un periódico de Canelones; Singer empresario industrial y agropecuario; Rath y Carrere eran médicos y este último propietario de una clínica privada. «En la embajada de Suecia», *La Mañana*, 3 de julio de 1973, p. 8; «Numerosos exlegisladores solicitaron la pasividad», *El Diario*, 8 de agosto de 1973, contratapa; «Homenaje a CarrereSapriza», *La Mañana*, 15 de diciembre de 1973, p. 4.

La participación de los pachequistas en el gobierno dictatorial

Los pachequistas con cargos en el Poder Ejecutivo que continuaron en sus puestos o relevaron a los renunciantes tampoco constituyeron un bloque homogéneo. En 1973 coincidieron en asumir su participación en el régimen desligada de su origen partidario, se posicionaron leales al presidente o fueron identificados como «hombres del proceso». De la UNR provenían los ministros Walter Ravenna (Defensa), Juan Carlos Blanco (Relaciones Exteriores) y José Etcheverry Stirling (Industria y Comercio), así como directores ministeriales y subsecretarios como el vicescanciller Guido Michelin Salomón y el viceministro de Industria Héctor Buela. De la alianza reeleccionista provenían los intendentes Oscar Rachetti (Montevideo), Gervasio González (Canelones) y Gilberto Acosta Arteta (Maldonado). Algunos jerarcas cultivaron cierto perfil «político»; otros se presentaron como «apolíticos» o «técnicos» en su pretensión de asepsia ideológica en tanto su apoliticismo suponía en realidad «apartidismo».

En el primer caso, así ubicaban algunos colorados a Blanco, Ravenna y Rachetti (Craviotto, 2005, p. 273; Lessa, 2017, p. 43). El segundo grupo se integró con jerarcas periféricos del reeleccionismo como Etcheverry Stirling o Michelin Salomón. Incluso Edgar Ney Ferreira, director municipal y suplente del intendente interventor de Montevideo durante más de una década, se autopercibía como «técnico». Entre los pachequistas con trayectorias ejecutivas precedentes provenientes del círculo de confianza de Pacheco hubo quienes fueron jerarcas en la dictadura (Federico García Capurro, Alejandro Rovira, Wilson Craviotto) y quienes no asumieron cargos (Carlos Pirán, Ulysses Pereira Reverbel, Danilo Sena o Walter Santos).

En cuanto a los pachequistas sin trayectorias parlamentarias o ejecutivas previas a 1973 pueden identificarse dos grupos. Por un lado, los reeleccionistas que continuaron reuniéndose en privado en la casa del Partido Colorado en Montevideo como parte de la comisión administradora de los bienes partidarios, presidida por Luis A. Rodríguez, directivo de la UNR hasta 1973. Por otro lado, se acercaron a Pacheco un grupo de empresarios o gerentes de empresas, propietarios de estudios jurídicos y negocios de diversa índole con vínculos con el fútbol profesional como José Pedro Damiani, Homero Bagnulo y Oscar Magurno, tres figuras protagónicas del pachequismo en los ochenta.²⁰

²⁰ Estas redes de sociabilidad con el mundo empresarial se reflejaron, por ejemplo, en agosto de 1974 cuando Pacheco fue fotografiado en La Coruña junto a los dirigentes de Peñarol en la copa Teresa

En el elenco gobernante las políticas de remodelación institucional recogieron menos consensos que las políticas de desmantelamiento. Las primeras medidas mostraron la carencia de un programa global de reformas para todas las áreas consideradas infiltradas, corrompidas o pervertidas por la sedición. Hubo intensas disputas sobre el tipo de reformas, su alcance y conducción, aunque Bordaberry responsabilizó al marxismo de montar una campaña de rumores sobre las diferencias en el gobierno.²¹ En parte se debía a que en el proyecto dictatorial convergieron tradiciones políticas e ideológicas diversas: propuestas e ideas inspiradas en el integrista católico, el conservadurismo ruralista, el liberalismo conservador, el neoliberalismo, influidas por la doctrina de la seguridad nacional, la guerra contrasubversiva y el respaldo de la *realpolitik* de la política exterior de Estados Unidos (Marchesi y Markarian, 2022; Iber, 2022). Estas tradiciones si bien confluían en la cruzada anticomunista, divergían en sus expectativas y propuestas concretas. Para articular las primeras propuestas de la «restauración económica y política» se llevaron a cabo tres cónclaves gubernamentales en los departamentos de Rocha, Colonia y Tacuarembó en agosto, octubre y diciembre de 1973, respectivamente, con la participación de jerarcas civiles y militares.²² Sin embargo, las incógnitas sobre el futuro del régimen y los múltiples centros de decisión política alimentaron rivalidades preexistentes y propiciaron nuevas alianzas entre militares y civiles. La diplomacia francesa evaluó a fines de 1973 que algunas reformas acordadas en los cónclaves eran «saboteadas» por las disputas en la toma de decisiones entre Bordaberry, el Consejo de Ministros, el Consejo Nacional de Seguridad (COSENA), la Junta de Comandantes en Jefe y los cuatro jefes de las divisiones militares en las que se dividía el país.²³

En cuanto al Poder Ejecutivo se procuró legitimar al régimen al mostrar la continuidad de Bordaberry como presidente de la República. Un primer escollo fue la negativa del vicepresidente Jorge Sapelli de presidir el Consejo de Estado sin la participación de los partidos. Bordaberry insistió a Sapelli en que se tomara unos días

Herrera. A su lado posaban Homero Bagnulo, Carlos Zeni y José Pedro Damiani. «Dirigentes aurinegros con el embajador en España», *El Diario*, 23 de agosto de 1974, contratapa.

²¹ «Declaraciones del Presidente Bordaberry al corresponsal de la Agencia Reuter», 11 de junio de 1974, en Nahum y Gapenne (2019, pp. 119-124).

²² «San Miguel. El Ejecutivo impulsará la actividad privada y reducirá la estatización», *La Mañana*, 28 de agosto de 1973, tapa; «El Cr. Cohen hizo un balance de los temas que ya se trataron en Nirvana», *La Mañana*, 9 de octubre de 1973, p. 5; «Reforma constitucional y legal acordaron en Paso de los Toros para coordinación de comunas», *La Mañana*, 8 de diciembre de 1973, tapa.

²³ «Uruguay frente a una segunda etapa», 18 de diciembre de 1973, en Nahum y Gapenne (2019, p. 253).

para evaluarlo y mientras tanto no se pronunciara en contra. Presionado por las especulaciones de la prensa y la inquisitoria de algunos militares, Sapelli decidió hacer pública su negativa el 28 de julio de 1973. Recibió una dura respuesta de Bordaberry que lo motivó a escribirle a Pacheco a mediados de agosto para explicarle su postura (Lessa, 2003, p. 339).²⁴La permanencia de varios ministros en el gabinete contribuyó a afirmar la imagen de relativa continuidad en la conducción estatal. En cambio, la sustitución del Parlamento electo por voto popular por un Consejo de Estado con atribuciones legislativas al margen de la constitución, integrado por 25 titulares designados por el Poder Ejecutivo y mandatados a elaborar un proyecto de reforma constitucional supuso un cambio institucional significativo, aunque no una innovación sin precedentes.²⁵

El Consejo de Estado tardó más de cuatro meses en constituirse. Bordaberry, según la diplomacia francesa, buscó conformarlo como un contrapeso civil ante el poder militar. La demora en instalarlo, según los reportes diplomáticos, se habría debido a que varios civiles rechazaron integrarlo por no tener claro el rumbo que adoptaría el régimen y a que el dirigente herrero-ruralista Martín Echegoyen, designado vicepresidente en sustitución de Sapelli, propuso que fuera integrado en partes iguales por blancos y colorados.²⁶ Las Fuerzas Armadas no aceptaron esa fórmula, aunque finalmente se lo integró por cuatro órdenes que se correspondían a «colorados», «blancos», «cívicos» y «mujeres» (Broquetas, 2022). Una vez instalado el 14 de diciembre de 1973, el embajador francés reiteró que la demora se debió a la evasiva de las personalidades sondeadas y los vetos de las Fuerzas Armadas. Wilson Craviotto se mostró molesto con la exclusión de los «políticos honestos» que votaron el desafuero del frenteamplista Enrique Erro.²⁷

Los consejeros de Estado eran en su amplia mayoría profesionales (abogados, ingenieros, médicos, docentes) y algunos contaban con trayectorias en la conducción estatal (exmagistrados, exministros y exlegisladores). Si bien provenían o se identificaban con sectores de la derecha colorada, blanca o cívica se asumían como

²⁴El «Bordaberry a Sapelli: los hechos no lo sitúan a Ud. Favorablemente para presidir el Consejo de Estado», *La Mañana*, 2 de agosto de 1973, p. 4.

²⁵Tras el golpe de Estado de 1898, el presidente interino Juan L. Cuestas instaló un Consejo de Estado, al igual que lo hizo el presidente Alfredo Baldomir al disolver el Parlamento en 1942.

²⁶«Un mes después del golpe de Estado», 24 de julio de 1973, en *Informes diplomáticos...*, op. cit., Tomo 3, pp. 211-212.

²⁷«Ante la iniciación de tareas en el Consejo de Estado», *Democracia*, 28 de diciembre de 1973, p. 3.

«apolíticos» o «patriotas» desinteresados por los partidos.²⁸ Su común denominador, a juicio del embajador francés, era que la política no había sido nunca su actividad principal y que coincidían en «posiciones antimarxistas».²⁹ La «restauración» de Uruguay, insistió Bordaberry, debía realizarse «sin marxismo ni políticos profesionales», empleando esta última expresión como equivalente a la de «demagogos» del discurso militar y de la retórica pachequista.³⁰ Pacheco pidió Bordaberry que no la utilizara de forma genérica contra todos los políticos (Lessa, 2003, p. 183), aunque este minimizó la controversia.³¹

En cuanto a los gobiernos departamentales, los intendentes blancos y colorados, con la excepción del jefe comunal de Rocha, se mantuvieron en sus cargos luego de la disolución del Parlamento y las Juntas Departamentales. A Craviotto no lo conformó y reclamó al gobierno la intervención de todas las intendencias en agosto de 1973 y la destitución de los jerarcas comunales que no eran leales a Bordaberry. Sostenía que los intendentes electos por el «ferreirismo», sector mayoritario del Partido Nacional y opositor a la dictadura, se habían reunido en secreto con el «carpincho», como llamaba de forma despectiva a su líder, Wilson Ferreira.³² Sin embargo, las intendencias no fueron intervenidas tras la disolución del Parlamento como estrategia para construir consenso y legitimidad (Correa Morales, 2018).³³ En cambio, todas las Juntas de Vecinos del país, sustitutas de las Juntas Departamentales electas en 1971, fueron designadas por el Poder Ejecutivo. El intendente de Montevideo Óscar Rachetti, interlocutor del régimen con el resto de los jefes comunales, se reunió varias veces con Bordaberry para designar a los nueve integrantes de la Junta de Vecinos de Montevideo, presidida por Héctor Volpe Jordán, excandidato a diputado por el reeleccionismo, e instalada en una ceremonia en el histórico Cabildo el 14 de agosto de 1973.³⁴ Algunos de los «vecinos» designados eran de origen colorado, pero no registraban actuación política reciente ni

²⁸ «Exjerarcas y universitarios integran el Consejo de Estado», *El Diario*, 14 de diciembre de 1973, p. 4

²⁹ «Sobre la constitución del nuevo Consejo de Estado», 17 de diciembre de 1973, en *Informes diplomáticos...*, op. cit., Tomo 3, pp. 249-251.

³⁰ «Con la prensa», *Marcha*, 24 de mayo de 1974, p. 8.

³¹ «Declaraciones del Presidente Bordaberry al corresponsal de la Agencia Reuter», 11 de junio de 1974, en *Informes diplomáticos...* op.cit., Tomo 4, pp. 123-124.

³² «Las Intendencias Deben ser Intervenidas», *Democracia*, 15 de agosto de 1973, p. 3.

³³ La excepción fue la intervención en octubre de 1973 de la Intendencia de Maldonado y la destitución por denuncias de corrupción contra el intendente Gilberto Acosta Arteta, electo por la UNR. «Proceso al intendente», *Marcha*, 16 de noviembre de 1973, p. 8.

³⁴ «Los días de silencio», *Marcha*, 27 de julio de 1973, p. 6; *El Diario*, 14 de agosto de 1973, tapa.

asumían en nombre de ningún sector político. Las juntas de vecinos restantes se conformaron esa semana en acuerdo con los intendentes respectivos.³⁵ «Con satisfacción vemos figurar en ellas a ciudadanos representativos de las fuerzas vivas del interior del país», escribió Craviotto y reparó en los profesionales y empresarios de origen colorado.³⁶ En cambio, un grupo de mujeres conservadoras favorables al régimen no quedó conforme y envió a la prensa una nota de protesta dirigida a Bordaberry por haber designado solo a «vecinos» varones.³⁷ Meses más tarde el gobierno nombró a algunas de estas mujeres en el Consejo de Estado.

Los pachequistas contra el «dogmatismo marxista» a nivel sindical y educativo

En cuanto al movimiento sindical, uno de los «aparatos ideológicos de la sedición» más relevantes para la alianza golpista, fue significativa la distancia entre las aspiraciones y las concreciones. En los primeros esfuerzos refundacionales fueron activos los titulares del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que se podrían vincular con el pachequismo periférico que se presentaba «apolítico». Los ministros Marcial Bugallo desde julio de 1973 y José Etcheverry Stirling desde julio de 1974 contaban con experiencia en conflictos laborales por haber sido designados por Pacheco como delegados de su gobierno en la Comisión de Productividad, Precios e Ingresos (COPRIN), creada para sustituir los consejos de salarios en 1968. Etcheverry Stirling, asimismo, había entablado relaciones con el empresariado y con los militares por su actuación como subsecretario de Trabajo y Defensa entre 1972 y 1973 y como ministro de Industrias desde 1973.³⁸ La represión contra los sindicatos fue permanente, pero los esfuerzos por refundar un sindicalismo domesticado fueron oscilantes y constituyeron un problema de difícil resolución para el gobierno (Morón, 2003).

En primer término, la ilegalización de la CNT el 30 de junio de 1973, durante la huelga general, no recogió unanimidades en la alianza golpista y la rechazó el coronel Ramón Trabal, jefe del SID. Tampoco las gestiones del ministro del Interior, el coronel Néstor Bolentini, con parte de la dirigencia sindical conformaron a altos mandos del

³⁵ «Quedaron constituidas las Juntas de Vecinos del interior», *El Diario*, 18 de agosto de 1974, p. 4

³⁶ «Se integraron las Junta de Vecinos», *Democracia*, 29 de agosto de 1973, tapa.

³⁷ «Se olvidaron de la mujer, una pena», *El Diario*, 22 de agosto de 1973, p. 17.

³⁸ «Composición del nuevo gobierno», 17 de julio de 1974, en *Informes...op.cit.*, Tomo 4, pp. 153-154.

Ejército que promovieron su destitución pocos meses después.³⁹ Ni los infructuosos esfuerzos que realizó a comienzos de 1974 el general Hugo Chiappe Posse, comandante en jefe del Ejército, con algunos dirigentes de la ilegalizada CNT para crear una central sindical «nacionalista», que no prosperó (Chagas y Tonarelli, 1989, p. 123).

En segundo lugar, el Poder Ejecutivo decretó una férrea reglamentación sindical a partir del decreto 622/973 de agosto de 1973, reclamada por pachequistas y militares tiempo atrás. Si bien se buscaba sustituir a los históricos sindicatos por nuevas estructuras sindicales débiles e inoperantes, pocos meses después el gobierno se vio obligado a suspender la aplicación de la reglamentación al advertir que la línea mayoritaria de la disuelta CNT decidió participar en los reducidos márgenes de maniobra permitidos a través de lo que llamaron la «batalla por la reafiliación» (Álvarez y Sosa, 2019). «El intento de reconstruir estructuras sindicales completamente libres del control de la C.N.T. ha demostrado ser, en la práctica, un fracaso», concluyó el embajador francés en diciembre de 1973.⁴⁰ Etcheverry Stirling explicó en 1976 que las disposiciones de la reglamentación «no eran suficientemente severas como para impedir que el marxismo reingresara a la conducción del movimiento sindical». El Ministerio de Trabajo, encabezado entonces por Marcial Bugallo, discontinuó su aplicación a fines de setiembre de 1973 y Bordaberry anunció su suspensión definitiva en marzo de 1974.

No obstante, la derogación por decreto de los convenios colectivos anteriores favoreció a los grupos empresariales cercanos a la órbita presidencial, como las empresas Lanatur (propiedad de Juan José Gari) y Seusa (editora de *La Mañana* y *El Diario*) que habían despedido o exigido a sus trabajadores cambios que violaban los laudos y convenios vigentes.⁴¹ Por otra parte, el pachequista José María Traibel fue uno de los cinco delegados designados por el Poder Ejecutivo en la COPRIN.⁴² En abril de 1974 se eliminó la representación de los dos trabajadores por haber sido electos por la disuelta CNT y usar su representación para canalizar reclamos sindicales de diversa índole, mientras que se mantuvo un tiempo más a los dos representantes empresariales. A partir de entonces, en paralelo al endurecimiento represivo, el gobierno dejó en suspenso algunos derechos previstos en el decreto 622/973, como la autorización de asambleas sindicales y la elección de sus autoridades, y puso en práctica lo más restrictivos como la

³⁹ Sobre la renuncia del coronel Bolentín», 12 de febrero de 1974, *ibidem.*, pp. 30-31.

⁴⁰ «Uruguay frente a una segunda etapa», 18 de diciembre de 1973, en *Informes...*, op.cit. Tomo 3, p. 253

⁴¹ Héctor Rodríguez: «Sindicatos: reglamento del reglamento», *Marcha*, 19 de octubre de 1973, p. 8.

⁴² «Asumió la delegación del Ejecutivo en la COPRIN», *La Mañana*, 26 de julio de 1973, p. 4.

prohibición de realizar acciones de carácter político y la reglamentación del derecho de huelga. El decreto ley 14.188 de abril de 1974 reorganizó la administración de justicia laboral, exigió individualizar los reclamos de los asalariados y centralizó la gestión autoritaria de las relaciones laborales en el Centro de Asesoramiento del MTSS, cartera a cargo primero de Bugallo y luego de Etcheverry Stirling. De forma simultánea, si el conflicto era acuciante o el abuso patronal desmedido los jefes militares intervinieron con posturas paternalistas hacia los trabajadores e intimidatorias hacia los empresarios a través de la Oficina Laboral del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (ESMACO), creada en 1972 e integrada por representantes de las tres armas (Sosa, 2022).

En el ámbito educativo, Alfonso Llambías Acevedo, pachequista y profesor de Literatura, integró el primer Consejo Nacional de Educación (CONAE) creado por la Ley General de Educación de enero de 1973. La ley fue defendida como una herramienta para «despolitizar» la enseñanza y defender la laicidad ante el «dogmatismo marxista» (Romano, 2004). Sin embargo, las intensas disputas en la alianza golpista entre los proyectos educativos de la «derecha tecnocrática» y la «derecha nacionalista» que identificó Leonor Berná (2022) tuvieron como resultado políticas educativas erráticas y hasta contradictorias, traducidas en reajustes y recambios permanentes de jefes civiles y desavenencias entre los diversos organismos gubernamentales. En agosto de 1973, Llambías de Acevedo votó a favor de la clausura del Instituto Normal de Montevideo y luego de la intervención del Instituto de Profesores Artigas. Unos trescientos docentes y más de doscientos funcionarios fueron destituidos entre agosto y octubre de 1973. Los sumarios, sanciones y destituciones docentes reforzaron una práctica autoritaria que tenía antecedentes durante la intervención de la enseñanza secundaria y técnica del gobierno de Pacheco en 1970. En febrero de 1974, no obstante, los desacuerdos con el ministro de Educación y Cultura, Edmundo Narancio, forzaron la renuncia de Llambías de Acevedo y de todos los integrantes del CONAE y del Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior (CESBS). Esta afección llevó al gobierno a decretar una segunda intervención en las tres ramas de la enseñanza en febrero de 1975, se reforzó la reglamentación autoritaria en secundaria (el aula, la vestimenta, las comisiones de padres, las cantinas, los libros) y se eliminó el carácter colegiado dado por la Ley de Educación de 1973.

El pachequismo y la «salida institucional» frustrada de 1974

El ingreso masivo de militares en actividad en la conducción del Estado profundizó las divisiones previas en las Fuerzas Armadas y las tensiones con los elencos civiles. La «seguridad para el desarrollo», estrategia declarada por la coalición golpista a partir de febrero de 1973, habilitó a que paulatinamente diversos sectores estatales fueran considerados estratégicos para la seguridad nacional y pasaran a ser conducidos o estrechamente supervisados por los militares. Esta militarización creciente alteró una división política, desde el inicio, confusa (militares garantes de la «seguridad» y civiles del «desarrollo») y se tradujo en la ocupación gradual por parte de oficiales superiores de la dirección de las empresas públicas, entes autónomos, ministerios y servicios diplomáticos (Lerin y Torres, 1987). Este proceso no fue lineal e irreversible ni sustituyó en todos esos lugares a los civiles. No hubo una oposición tajante ni permanente entre militares y civiles, sino que las corrientes castrenses vinculadas a generales en actividad incluían redes de influencia de civiles de distintas procedencias.

Desde diciembre de 1973 el comandante general del Ejército, el general Hugo Chiappe Posse, exedecán y militar de confianza de Pacheco, promovió una «salida legal» para la «normalización» institucional, según los reportes del embajador francés en Montevideo.⁴³ De acuerdo con sus fuentes coloradas, en particular de un exsenador quincista del que no se revela su nombre, Chiappe reunía a «pachequistas y legalistas» en torno a su persona, e incluso tendría el apoyo secreto de la embajada Argentina. Para la «salida institucional», que incluía la posibilidad de adelantar las elecciones previstas para noviembre de 1976, Chiappe realizó intensas negociaciones políticas para contrarrestar la influencia de la corriente «brasileira», volcada hacia la extrema derecha y encabezada por el general Esteban Cristi, a cargo de la División Militar N.º 1, con el mayor continente militar del país y asiento en Montevideo. La tendencia «institucionalista» que lideraba Chiappe, como la llamaba el diplomático, había ganado peso en la interna castrense. Esto luego de que la corriente «peruanista», liderada por el general Gregorio Álvarez, había sido neutralizada por los seguidores de Cristi que forzaron la salida del gobierno de dos influyentes referentes: el coronel Néstor Bolentini debió renunciar como ministro del Interior y el coronel Ramón Trabal como director

⁴³«Uruguay frente a una segunda etapa», 18 de diciembre de 1973, en *Informes...* Tomo 3, pp. 252-253.

del SID.⁴⁴ Disconforme con la política económica y la falta de depuración política del régimen, la corriente militar encabezada por Cristi insistía en una reorganización ministerial. Para el embajador francés, si Bordaberry continuaba como jefe de Estado en febrero de 1974 se debía a que tanto la diplomacia argentina como la estadounidense habían manifestado a los militares uruguayos su disconformidad con la eventual sustitución del presidente por una Junta Militar.⁴⁵

En mayo de 1974, finalmente, se desató una crisis interna en la cúpula castrense, cuya máxima expresión fue la destitución del comandante en jefe del Ejército, Hugo Chiappe Posse. En el marco de la discusión sobre el rumbo económico y el eventual relevo de Bordaberry, las Fuerzas Armadas evaluaron la posibilidad de crear una Junta Militar de gobierno similar a la de Chile. Chiappe, ante esa posibilidad, aspiró a ocupar el cargo de presidente de la Junta Militar, pero sin renunciar a la comandancia del Ejército. Los informes al respecto de la diplomacia francesa revelan que la estrategia tenía como fin el retorno a la democracia a través de un proyecto constitucional, a plebiscitarse en 1976, que consagrara la tutela de las Fuerzas Armadas y una ley que reactivara saneados a los partidos «no marxistas». En acuerdo con «pachequistas y legalistas», estos civiles y militares buscaban superar la atomización de centros de decisión (Presidencia, Cosená, Junta de Comandantes, jefes regionales...) y evitar que la extrema derecha castrense reemplazara a Bordaberry por una Junta Militar.

Un parte especial de información del SID, fechado en marzo de 1974, registró las «actividades en el ámbito político en busca de la creación de un 'frente común' para contrarrestar la acción de las FF.AA. y lograr lo antes posible la vuelta a la 'normalidad'». La información era coincidente, aunque con variantes en las fechas y protagonistas, con la proporcionada al embajador francés por una fuente cercana a Cristi que le aseguró que Chiappe Posse se había reunido en febrero de 1974 en Buenos Aires con Wilson Ferreira y en París con Pacheco y Glauco Segovia. El documento de la inteligencia militar sostenía en cambio que la reunión se había realizado en enero en París o en la frontera franco-española entre Jorge Pacheco Areco, Wilson Ferreira, Glauco Segovia y Héctor Payssé Reyes para buscar una salida legal:

⁴⁴«Coyuntura uruguaya», 28 de febrero de 1974, en *Informes...* op.cit. Tomo 4, p. 41; «Sobre la renuncia del coronel Bolentini», 12 de febrero de 1974, *ibidem.*, pp. 30-31. Sobre el traslado a Francia del coronel Trabal y su asesinato, véase: Jalabert D'Amado, (2020, p. 39) y Merklen (2020, p. 45-107).

⁴⁵«Intervención de Argentina para impedir un nuevo golpe de Estado», 13 de febrero de 1974, en *Informes...*, op.cit., Tomo 4, p. 32; «Crisis interna en Uruguay», 21 de febrero de 1974, *ibidem.*, p. 37.

Dicha reunión que fuera realizada como consecuencia de un constante enlace entre Bordaberry y Pacheco, como así por la intervención permanente de muchos elementos versó sobre la necesidad de reunir a todas las fuerzas políticas del país para hacer un 'frente común' contra la influencia de las FF.AA. y la rápida vuelta a la normalidad.⁴⁶

Por su parte, Wilson Craviotto visitó a Pacheco en Madrid en los primeros meses de 1974. Al retornar a Uruguay, según la carta que le enviara desde Montevideo, le informó al ex presidente que se había entrevistado tal como había quedado en España con un general de las Fuerzas Armadas. El militar de alto rango le habría asegurado que el general Gregorio Álvarez no tenía las «posiciones de izquierda» que se le atribuían, en alusión a que Bordaberry y su círculo sostenían que Álvarez podría agrupar a «militares izquierdistas» (Lessa, 2003, p. 193) o «nacionalistas de izquierda», según los informes del embajador francés (Merklen, 2022, p. 45). Si bien Craviotto dudaba de las divisiones castrenses que le había transmitido el militar, así como en la posibilidad de confiar en los mandos para el retorno del ex presidente, le aseguró a Pacheco que las Fuerzas Armadas tenían «muchos puntos en común» con «nosotros» y le alertó que otros pachequistas no lo asesoraban adecuadamente al visitarlo en Madrid (Craviotto, 2005, p. 271).

En abril de 1974, el embajador francés reportó que un ex senador del batllismo quincista le confió en una entrevista personal que había realizado una ronda de contactos con jerarcas militares para concretar una «salida legalista» de la dictadura. Había contactado al brigadier José Pérez Caldas, ex comandante de la Fuerza Aérea, y al general Eduardo Zubía, al frente de División Militar N°2. Proyectaba concretar los encuentros de forma discreta en la casa de Federico García Capurro, entonces integrante del comité ejecutivo de la UNESO, de regreso transitoriamente a Uruguay. El objetivo era elaborar un proyecto constitucional que, según el embajador francés, «legalizaría el control de los militares sobre el gobierno, garantizaría sus exigencias esenciales en contra de una vuelta al pasado, y pondría un fin a la actual atomización del poder nacida de la multiplicidad de los centros de decisión». El ex senador colorado, del cual no relevó su nombre, le confió al embajador que lo «alentaba» y «apuraba» la Embajada de Estados Unidos. La diplomacia norteamericana, según el reporte francés, «temía que los elementos más activistas del Ejército destituyan, en los próximos meses, al presidente

⁴⁶ «Parte especial de Información No.53/974,» en Archivos del Terror de Uruguay - Archivo SID (Berrutti) - Rollo 804r - Documentos de 1974 del Dpto I con Registro de Entrada 2571 al 3334», pp. 774-775

Bordaberry, y tomen directamente el poder sin ser ellos mismos capaces de brindar soluciones a los problemas económicos planteados».⁴⁷

En mayo de 1974, otro informe diplomático dirigido a París consignó que existía un «profundo descontento» de los militares uruguayos con mando de tropa por el deterioro de la situación económica y social. Los generales parecían tener dificultades para controlar a sus subordinados al punto que capitanes y coroneles se habían reunido sin autorización del mando superior para forzar la destitución de Bordaberry. El informe aseguraba que los generales de las Fuerzas Armadas dudaban entre tres opciones: 1) reemplazar a Bordaberry por una Junta Militar, 2) mantener la «fachada democrática» que constituían el presidente y el Consejo de Estado y 3) crear el cargo de primer ministro para evitar el desgaste del presidente.⁴⁸ Al frente de los militares que exigían la renuncia del equipo económico que lideraba Moisés Cohen se ubicaban los generales Eduardo y Rodolfo Zubía, a cargo de las Divisiones Militares N°2 y N°3. Hasta entonces habían sido los «árbitros» de las disputas entre las corrientes «peruanista» y «brasileña». El general Gregorio Álvarez, a cargo de la División N°4, «jefe de la tendencia ‘populista’ parece haberse mantenido reservado, sin oponerse al movimiento». ⁴⁹La crisis hizo eclosión el 22 de mayo cuando la Junta de Comandantes en Jefe reemplazó a Chiappe por el general Julio César Vadora, agregado militar en la embajada uruguaya en Estados Unidos. En base a los datos de una «excelente fuente» se le informó al embajador francés dos días después que la destitución de Chiappe evitó el retorno al gobierno de Pacheco. La salida frustrada, según el diplomático, se inició cuando se volvió inminente la muerte del vicepresidente de facto, Martín Echegoyen, fallecido el 18 de mayo de 1974. Un grupo de «oficiales subalternos» aprovechó la ocasión para que un general accediera a la vicepresidencia y forzara la destitución del equipo económico. Enterado de la movida, Bordaberry envió de forma «precipitada» un emisario a Madrid y propuso a Pacheco designarlo directamente como vicepresidente. Pacheco puso como condición la destitución de los cuatro comandantes de las regiones militares, incluidos los hermanos Zubía. Cuando en la Junta de Comandantes en Jefe se evaluó sustituir a Bordaberry por una Junta Militar, Chiappe reclamó la presidencia de forma provisoria sin abandonar la comandancia del Ejército. El general Esteban Cristi, al frente de la División Militar N.º1, a quien «algunos vínculos unían todavía al

⁴⁷«Situación interna uruguaya», 18 de abril de 1974, *Informes...* op.cit. Tomo 4, p. 66.

⁴⁸«El 1.º de mayo en Uruguay», 8 de mayo de 1974, *ibid.*, p. 84

⁴⁹«Sobre la situación interna», 22 de mayo de 1974, *ibid.*, pp. 95-96

expresidente Pacheco», no puso objeciones. Los hermanos Zubía, en cambio, exigieron que el presidente fuera un militar sin pertenencia a la Junta de Comandantes en Jefe. Chiappe «se jugó el todo por el todo y, aplicando las consignas del expresidente Pacheco, le quitó su mando a los hermanos Zubía». Estos se rebelaron y, con el apoyo de la Marina y la Fuerza Aérea, forzaron la sustitución de Chiappe por Vadora.⁵⁰ La corriente de los «militares institucionalistas» fue rápidamente purgada, incluyendo el apartamiento de tres generales y de cincuenta coroneles de un total de ciento treinta.⁵¹

La asunción del general Vadora fue presentada por la diplomacia francesa como una «solución de equilibrio» frente a las disputas entre Cristi, Álvarez y los hermanos Zubía. Vadora no tenía buena relación con Chiappe y estaba en «malos términos» con Pacheco que lo había sancionado en 1969.⁵² Al asumir como comandante en jefe del Ejército, según el embajador francés, Vadora inició una «caza de brujas» de los reeleccionistas al reanudar la lucha contra los delitos económicos y detener por algunas horas a los exsenadores Raumar Jude y Agustín Caputti. Según el embajador, la «ruptura con los pachequistas» por parte de la cúpula militar acentuó el aislamiento político de Bordaberry a partir de 1974.⁵³ Pese a que se mantenían Blanco, Ravenna y Echeverry Stirling en el gabinete, el embajador francés evaluaba que tras la purga de mayo de 1974 el reeleccionismo perdió «significación política».⁵⁴

Comentarios finales

En los relatos partidarios se asumió que los políticos opositores a la dictadura civil y militar de Uruguay (1973-1985) fueron ampliamente mayoritarios y los oficialistas un grupo muy reducido vinculado de forma individual al régimen. Se proyectó en forma retrospectiva para todo el período dictatorial la dicotomía «políticos-militares» instalada en la «transición a la democracia» como equivalente a la de opositores-oficialistas, invisibilizando la actuación autoritaria de líderes y sectores de los partidos.

⁵⁰ Esta última fase de la crisis fue abordada en Lessa (2017, pp.120-125)

⁵¹ «Situación política», 24 de mayo de 1974, en *Informes...*, op.cit., Tomo 4, pp. 98-99.

⁵² En 1969, durante el gobierno de Pacheco, el coronel Ramón Trabal lideró un operativo de inteligencia militar que expuso una reunión de la logia Tenientes de Artigas realizada en la casa de Julio César Vadora que evaluaba la posibilidad de forzar un golpe de Estado (Lessa, 2003, pp. 240-241).

⁵³ «Situación interna», 25 de junio de 1974, en *Informes...*, op.cit., Tomo 4, pp. 128-129; «Informe de fin de misión», 14 de abril de 1975», *ibid.*, Tomo 5, pp. 33-36.

⁵⁴ «Composición del Nuevo Gobierno», 17 de julio de 1974, *ibid.*, Tomo 4, p. 152.

El expresidente Jorge Pacheco Areco y la mayoría de los dirigentes de la UNR, la alianza electoral más votada del Partido Colorado en las elecciones de 1971, no solo apoyaron públicamente la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973. Suspendeda la actividad partidaria y parlamentaria, parte de la dirigencia pachequista integró la coalición golpista, contribuyó a dismantelar las instituciones democráticas y a cogobernar con las Fuerzas Armadas al ingresar o continuar en la conducción de algunos ministerios, intendencias, el Consejo de Estado y las Juntas de Vecinos de todo el país.

Los pachequistas se autoidentificaron como «demócratas», no por oposición a la dictadura, sino al «totalitarismo marxista». Esta identidad política «demócrata» la compartieron con otros grupos de la derecha liberal conservadora desde el inicio de la Guerra Fría. Desde su perspectiva, el golpe de Estado fue inevitable y necesario para cortar con la «demagogia» opositora y enfrentar el auge de la «subversión marxista» en sindicatos, centros de estudio, partidos y medios de prensa no oficialistas. En suma, el pachequismo no fue una expresión residual del sistema de partidos ni un actor minoritario del Partido Colorado. Tampoco fue irrelevante su actuación durante el desenlace golpista y la instalación de la dictadura ni reducible a las posiciones individuales de Pacheco.

No obstante, si bien convergieron en ideas y propuestas anticomunistas con otros actores de la alianza dictatorial, mantuvieron relaciones dispares, conflictivas y cambiantes con las Fuerzas Armadas. Pacheco, junto a algunos militares y dirigentes colorados buscaron sin éxito una «salida legal» de la dictadura en 1974 al corroborar que podría no ser breve ni transitoria ni incluirlos en la renovación de la dirigencia política. La coalición golpista que apoyaron estaba más cohesionada en su cruzada anticomunista que en torno al tipo de régimen democrático que necesita refundar el «Nuevo Uruguay».

Fuentes

Archivo General de la Nación (AGN), Fondo Federico García Capurro (FFGC), 1969-1974.

Archivos del terror de Uruguay, Archivo SID (Berruti), versión en línea difundida en mayo de 2023 en Arhive.org: <https://archive.org/details/archivos-del-terror-de-uruguay>

Benjamín Nahum y Camille Gapenne. (2019). *Informes diplomáticos de los representantes de Francia en el Uruguay (2° serie)*. Montevideo, Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República, 2019. Tomos 1 a 4 (1971-1975)

Prensa: *Acción* (1972 y 1973), *El Diario* (1973-1974), *La Mañana* (1970-1985), *Azul y Blanco* (1973-1974), *Democracia* (1973) y *Marcha* (1973-1974)

Bibliografía

- Alonso, E. (2012). *Clandestinos. Clandestinos. Blancos y colorados frente a la dictadura 1973-1985*. Montevideo: EBO
- Alvarez, S. y Sosa, Á. (2019). Trabajadores y sindicalismo en el Uruguay de la dictadura (1973-1985): bibliografía, fuentes y acervos documentales disponibles. *Sociohistórica*, (44), e093.
- Berná, L. (2022). La disputa político-pedagógica de las derechas por la reforma de la enseñanza media en dictadura (1973-1985). En M. Broquetas, y G. Caetano (Coords.) *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura*, Montevideo: EBO, pp. 285-300
- Broquetas, M. (2007). Liberalización económica, dictadura y resistencia. 1965-1985. En A. Frega et al, *Historia del Uruguay en el siglo XX. 1890-2005* (pp. 163-210). Montevideo: EBO.
- Broquetas, M. (2022). La nación y la casa en orden. Mujeres y jóvenes de derecha en la cruzada anticomunista de Uruguay (1959-1973). En M. V. S. Jiménez (Ed.), *Juventudes y mujeres de derecha durante la Guerra Fría en América Latina*. Ciudad de México: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Bruno, M., Duffau, N., y Ferreira, P. (2012). La centralidad de la política era algo que queríamos en el presente y que buscábamos en el pasado. Entrevista. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, 3(3).
- Buquet, D., Chasqueti, D. y Monestier, F. (2021). Golpe, dictadura y reconfiguración orgánica (1973-1984). En J. Rilla, y J. Yaffé (Dirs.), *Partidos y movimientos políticos en Uruguay. Colorados* (pp. 107-117). Montevideo: Crítica.
- Caetano, G. y Rilla, J. (1987). *Breve historia de la dictadura*. Montevideo: EBO
- Caetano, G., Rilla, J., y Pérez, R. (1987). La partidocracia uruguaya. Historia y teoría de la centralidad de los partidos políticos. *Cuadernos del CLAEH*, (44), 37-61.
- Chagas, J., y Tonarelli, M. (1989). *El sindicalismo uruguayo bajo la dictadura, 1973-1985*. Montevideo: Ediciones del Nuevo Mundo.
- Correa Morales, J. (2018). *Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo. Autoritarismo civil militar en dictadura. Durazno, 1973-1980*. Montevideo: Fin de Siglo
- Costa Bonino, L. (1995). *La crisis del sistema político uruguayo*. Montevideo: FCU.
- Craviotto, W. (2005). *La verdadera historia jamás contada. De la Reforma Naranja al Pacto del Club Naval. Testimonios de una época: políticos, tupamaros, militares*. Montevideo: s. d.
- Demasi, C. (2009). La evolución del campo político en la dictadura. En C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico, *La dictadura cívico-militar. Uruguay 1973-1985*. Montevideo: EBO.
- Demasi, C. (2012). La partidocracia uruguaya: aportes para la discusión de una hipótesis. En *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, 3(3).
- Dutrénit, S. (1994a). *El maremoto militar y el archipiélago partidario: Testimonios para la historia reciente de los partidos políticos uruguayos*. Montevideo: ECS-Instituto Mora.
- Dutrénit, S. (1994b). El fin de la insularidad uruguaya y la política partidaria entre 1973 y 1976. En S. Dutrénit, y L. Valdéz (Coords.), *El fin de siglo y los partidos políticos en América Latina* (pp. 97-

- 111). Ciudad de México: Instituto Mora y Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Itzapalapa
- Ferreira, P. (2013). *La república perdida: democracia y ciudadanía en el discurso político de los batllistas de la lista quince: 1946-1972.*(Tesis de Maestría en Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay).
- Gabay, M. (1988). *Política, información y sociedad. Represión en el Uruguay contra la libertad de expresión y crítica.* Montevideo: CIU, Serie Estadios 4.
- Gillespie, Ch. (1995). *Negociando la democracia. Políticos y generales en Uruguay.* Montevideo: ICP-Fundación de Cultura Universitaria.
- González, L. E. (1985). *Transición y restauración democrática*. En Ch. Gillespie, L. Goodman, J. Rial, y P. Winn(Eds.), *Uruguay y la democracia.* Montevideo: EBO.
- González, L. E. (1993). *Estructuras políticas y democracia en Uruguay.* Montevideo:FCU.
- Iber, P. (2022). *La Guerra Fría y sus impactos en Uruguay.*En M. Broquetas, y G. Caetano, G. (Coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura* (pp. 38-39).Montevideo:EBO,
- Lerin, F. y Torres, C. (1987). *Historia política de la dictadura uruguaya. 1973-1980.* Montevideo: Nuevo Mundo.
- Lessa, A. (2003). *Estado de guerra.* Montevideo: Fin de Siglo
- Lessa, A. (2017). *La primera orden. Gregorio Álvarez el militar y el dictador. Una historia de omnipotencia* (2.^{da} ed.). Montevideo: Sudamericana.
- Linz, J. (1987). *La quiebra de las democracias.* Madrid: Alianza.
- Marius, J. (2004). *Elecciones uruguayas 1980-2003.* Montevideo: Fundación Konrad Adenauer Uruguay.
- Marchesi, A. y Markarian, V. (2012). *Cinco décadas de estudios sobre la crisis, la democracia y el autoritarismo en Uruguay. Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX,* 3(3).
- Marchesi, A y Markarian, V. (2022). *La última dictadura en el pasado y el futuro de las derechas uruguayas.*En M. Broquetas, y G. Caetano (Coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura* (pp. 398-403). Montevideo: EBO.
- Martínez, V. (2005). *Tiempos de dictadura 1973/1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día.* Montevideo: EBO
- Martínez, V. (2022). *Dictadura y medios de comunicación. Control, censura y propaganda.* En M. Broquetas, y G. Caetano (Coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura* (pp. 398-403). Montevideo:EBO.
- Merklen, D. (2022). *De Tralalá a Soca.* En L. Jalabert D'Amadoy D. Merklen (Dirs.), *La dictadura desde Francia.* Montevideo: Ediciones del Berretín.
- Morón, A. (2003). *El estado y la cuestión sindical en los inicios de la dictadura (1973-75/76).* Simposio Mercados y Mundos de Trabajo Urbanos. Terceras Jornadas de Historia Económica. Montevideo: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República.

- O'Donnel, G., Schmitter, P., y Whitehead, L. (Comps.).(1988). *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Buenos Aires: Paidós.
- Rey, M. (2022). Derecha colorada y autoritarismo: Pacheco y los pachequistas en la dictadura (1973-1985).En M. Broquetas, y G. Caetano, G. (Coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura*. Montevideo:EBO.
- Rial, J. (1984). *Partidos políticos, democracia y autoritarismo* (2 vols). Montevideo: EBO
- Sosa, Á. (2022). Estado, políticas laborales y organizaciones sindicales en el Uruguay de la dictadura (1973-1985).En M. Broquetas, y G. Caetano (Coords.), *Historia de los conservadores y las derechas en Uruguay. Guerra Fría, reacción y dictadura* (pp. 301-314). Montevideo: EBO.
- Venturini, Á. (1989). *Estadísticas electorales 1917-1989 y temas electorales*. Montevideo: EBO